

Editorial

Definiciones para la seguridad pública

La seguridad pública volvió a instalarse esta semana como la principal preocupación ciudadana a nivel local. Los recientes homicidios registrados en distintas comunas de la Región del Biobío no solo han generado conmoción, sino que también han reavivado una inquietud extendida entre los habitantes de la zona, que se relaciona con la sensación de que la violencia se está normalizando y de que las respuestas institucionales siguen siendo insuficientes frente a un fenómeno que evoluciona con rapidez.

La gravedad de los hechos ocurridos durante los últimos días obliga a una reflexión profunda. Cada homicidio, como fue el ocurrido con una mujer adulta mayor en Coronel, representa una tragedia humana irreparable, pero también constituye una señal de alerta para el conjunto de la sociedad. Cuando los delitos más violentos comienzan a repetirse con frecuencia, se erosiona la confianza de las comunidades, aumenta el temor en los barrios y se debilita la percepción de control que debe ejercer el Estado.

Esta preocupación adquiere especial relevancia en un contexto donde el debate nacional sobre seguridad continúa abierto. Durante su campaña presidencial, José Antonio Kast comprometió una estrategia robusta para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado. Sin embargo, a varios meses del inicio de su administración, las críticas han apuntado precisamente a la ausencia de una hoja de ruta clara. Primero fue la gestión de la exministra Trinidad Steinert la que estuvo bajo cuestionamiento; ahora las miradas se concentran en el actual encargado del área, Martín Arrau, especialmente después de sus declaraciones respecto de que la estrategia impulsada durante el gobierno de Gabriel Boric sería suficiente y serviría de base para el trabajo actual.

Posteriormente, el Ejecutivo aclaró que se encuentra trabajando en más de una veintena de iniciativas legales y urgencias legislativas vinculadas a la seguridad. Sin embargo, mientras las definiciones continúan desarrollándose en Santiago, las municipalidades han debido asumir un protagonismo creciente para responder a las demandas de sus vecinos.

La realidad del Biobío refleja con claridad esta situación. En Concepción, las prioridades se concentran en combatir incivildades, fortalecer el trabajo comunitario y enfrentar delitos que han mostrado incrementos, como los robos con violencia e intimidación. En

Talcahuano, las autoridades locales advierten sobre la necesidad de contar con más recursos humanos, tecnológicos y logísticos, además de abordar fenómenos complejos asociados a personas en situación de calle, ocupaciones irregulares de espacios públicos y consumo de alcohol y drogas.

San Pedro de la Paz enfrenta un escenario particularmente preocupante en materia de violencia intrafamiliar. Según cifras de Carabineros, se registran 1.098 casos, un 8,1% más que en igual período del año anterior. Coronel, por su parte, observa un aumento en delitos como robos en lugares habitados y no habitados, mientras insiste en la necesidad de contar con un plan regional de seguridad pública que permita coordinar esfuerzos y fortalecer la presencia institucional.

El denominador común de los municipios es la necesidad de mayores recursos, mejor tecnología, más personal y una coordinación más efectiva entre los distintos niveles del Estado. También existe una coincidencia transversal respecto de la urgencia de contar con una planificación regional que permita abordar las particularidades del Biobío y no depender exclusivamente de políticas diseñadas desde el nivel central.

Por ello, la primera Cuenta Pública del Presidente Kast, programada para este lunes 1 de junio, genera expectativas que van mucho más allá de los tradicionales anuncios sectoriales.

La seguridad pública se ha transformado en una prioridad nacional desde hace varios años y los recientes ho-

mucios ocurridos en la Región del Biobío son un recordatorio doloroso de aquello. Las comunidades necesitan coordinación institucional y medidas que permitan recuperar espacios públicos, fortalecer la prevención y perseguir con eficacia a quienes cometen delitos. Pero también requieren una visión estratégica capaz de integrar a municipios, policías, fiscalías y organismos del Estado bajo objetivos comunes.

La Cuenta Pública representa una oportunidad para despejar dudas y entregar esa dirección. El desafío para el Gobierno será demostrar que existe una estrategia coherente, con metas definidas y herramientas suficientes para enfrentar una crisis que ya no admite improvisaciones. Porque mientras el debate continúa, la violencia sigue golpeando a los barrios y la ciudadanía espera respuestas que estén a la altura de la preocupación que hoy domina la agenda pública.

El denominador común de los municipios es la necesidad de mayores recursos, mejor tecnología, más personal y una coordinación más efectiva entre los distintos niveles del Estado. También existe una coincidencia transversal respecto de la urgencia de contar con una planificación regional